

VRAEM: narcotráfico, terrorismo y militarización*

Ricardo Soberón G.

HACE UN MES, AMIGOS DE UNA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL interesados en ingresar al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), con un proyecto de cacao, nos pidieron elaborar un documento que diera algunas coordenadas, criterios o elementos para entender esta región. Entre otras cosas les dijimos que había que tener muchísima cautela en la manera en que se establecerían las relaciones con los actores sociales y políticos de la zona. Luego de establecer los contactos necesarios con la población, viajaron hacia el VRAEM dos representantes de dos exsubcontratistas de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) en la zona. Lamentablemente las dos personas que viajaron tenían un mal antecedente entre la población campesina beneficiaria. Por esta razón, en las reuniones que sostuvieron en Pichari salieron muy mal parados frente a la población. Los productores nos dijeron que si bien confiaban en nosotros, esa confianza se había dañado al haber traído a esos funcionarios asociados a la AID. Inmediatamente nos contactamos con la gente de la agencia para preguntar qué había sucedido e increparles por haber llevado gente con una irregular trayectoria, haciéndonos quedar mal frente a la población. Con este relato

* El presente texto es producto de una exposición del autor realizada en **desco**-Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, en el marco del taller permanente de reflexión anual que da lugar a los volúmenes temáticos de la serie *Perú Hoy*.

queremos mostrar la dificultad que hay desde Lima para entender las dinámicas sociales, políticas y económicas de estas regiones, muy distintas a las de la capital.

En ese sentido, y en la búsqueda de comprender mejor esta compleja problemática, consideramos que hay tres grandes ejes para entender el VRAEM:

1. La dinámica global del narcotráfico.
2. Identificación de ejes temáticos y actores puntuales.
3. Problemática y situación de la región.

1. La dinámica global del narcotráfico

Como parte de nuestras tareas de dirección del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDDH) hemos participado en Bolivia del IV Foro Internacional sobre la Hoja de Coca, evento organizado con el gobierno de ese país para entender las dinámicas sobre el tema que tiene la actual gestión del presidente Evo Morales, producto de todo este proceso llamado «guerra contra las drogas» y de las políticas de control social sobre la hoja de coca¹. Morales fue en sus inicios un dirigente cocalero, quien en el 2005 fue acusado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico, lo que posibilitó, paradójicamente, su éxito político. Por otro lado, hace unas semanas estuvimos en Bogotá en el Foro Nacional sobre Cultivos Ilícitos y Drogas, una actividad que forma parte de los Acuerdos de La Habana suscritos entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyo punto n° 4 tiene que ver con el tema de las drogas y los cultivos ilícitos (hoja de coca, amapola y marihuana). Este foro convocó a 1300 delegados de todos los departamentos de Colombia, que venían de un paro agrario

¹ IV Foro Internacional de la Hoja de Coca: Hacia la Construcción de una Nueva Política de Control Social y Revalorización de la Hoja de Coca. Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDDH). Lima, setiembre del 2013.

de más de cincuenta días y que se congregó durante tres días en Bogotá. Lo que encontramos es que tanto las FARC como el Estado colombiano usan «convenientemente» este tema tan sensible para los campesinos y colonos colombianos (el gobierno del presidente Juan Manuel Santos lo utiliza para su reelección el 2014 y las FARC para que sus militantes no sean extraditados a los Estados Unidos). Lo que sucede en Bolivia y en Colombia son los dos extremos en los que se mueven las políticas regionales sobre drogas, y el Perú se encuentra en medio.

Sobre el tema del VRAEM, hace aproximadamente dos semanas salió el Informe de Naciones Unidas de Monitoreo de los Cultivos de Coca (2012)², en donde se nos declara primeros productores mundiales de hoja de coca y de pasta básica de cocaína. Con ello se demuestra el fracaso de las políticas basadas en interdicciones indiscriminadas y poco efectivas ejecutadas a lo largo de los primeros diez años del siglo XXI. Este crecimiento indetenible ya había sido reconocido por el ministro del Interior y por la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), ambos defensores de una erradicación inefectiva y dañosa. ¿Cuál es el escenario político internacional en relación a la cocaína? *Grosso modo*, en el mundo hay entre 16 y 19 millones de usuarios de cocaína y en los Andes hay unas 220 mil hectáreas de sembríos de hoja de coca distribuidas en los valles de Colombia, Bolivia y Perú.

Lo que hemos visto en los últimos 25 a 30 años con los sembríos de hoja coca han sido procesos de expansión, retracción, fragmentación, traspaso, «efecto globo», cíclicos, entre otros cambios ocurridos a merced de las dinámicas del mercado ilegal, antes que de la eficacia de las políticas aplicadas por los Estados. Todo ello nos conduce inmediatamente a poner en tela de juicio todas estas evaluaciones que parten por identificar el comportamiento

² Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). *Perú. Monitoreo de Cultivos de Coca 2012*. Lima: UNODC, 2013. Ver en: goo.gl/vfksr9

de los países según la magnitud de las áreas de cultivo ilícito. Hoy, el área, la unidad de hectárea, no es más útil para señalar que un determinado país «se porta bien» o «se porta mal», porque la tecnología agrícola y el uso creciente de insumos agrarios hacen que en una unidad que antes podía tener 10 mil plantas, ahora tenga 15 o 20 mil. No solo eso, la tecnología empresarial de los narcotraficantes permite actualmente mayores rendimientos por unidad del peso de hoja de coca seca.

Queda claro entonces que el área no es más un factor para medir rendimientos, hecho que no quiere ser reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni por el gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.). El área actual de cultivos de hoja de coca en los Andes es de 220 000 hectáreas, en donde anualmente se producen entre 700 a 900 toneladas métricas (Tm) de clorhidrato de cocaína para satisfacer, aproximadamente, entre 16 a 19 millones de usuarios en el mundo. Las policías internacionales incautan anualmente entre 400 a 450 Tm de cocaína, es decir, la mitad de la cocaína producida es incautada. La respuesta empresarial del narcotráfico es el «corte» de la droga. Las 350 o 400 Tm que llegan a su destino son combinadas con anfetaminas, codeína u otras sustancias mediante una simple acción, duplicando o triplicando así esa producción³. Por eso, no estamos de acuerdo con la acción de interdicción aislada de otras políticas, porque no hace efecto ni daño en el lado de la demanda.

El gobierno de los EE.UU. señala que sí se ha bajado de 10 a 6 millones de usuarios de cocaína, pero que su precio al detal no ha subido, sino que ha bajado, siendo ahora más barata. De esta manera tenemos que el enfoque de la reducción de la oferta es respondido por la economía del narcotráfico con en la distribución, mientras

³ Soberón, Ricardo. «Tendances et paradoxes du narcotrafic en Amérique latine». *Alternatives Sud. Narcotrafic. La Guerre aux Drogues en question*, vol. 20, n.º 3. Louvain-la-Neuve: Le Centre Tricontinental (CETRI), 2003, pp. 31-43.

que por el lado de la demanda los traficantes hacen el «corte» de la droga.

Si analizamos a nivel de precio por unidad de cocaína producida, veremos lo siguiente: en chacra el kilo de cocaína debe estar entre US\$ 700 y 900 por kilo salido del laboratorio. Luego, hay una elevación sustantiva de los precios de la unidad de clorhidrato de cocaína producida, porque de esos US\$ 900 por kilo en el lugar de origen, se pasará a US\$ 2000 en los lugares intermedios como Huancayo, Cusco o Ayacucho. Cuando la cocaína llega a la frontera -Arica, Desaguadero, Santa Rosa (en el trapecio amazónico) o el eje Loja-Ayabaca- ya estaremos hablando de unos US\$ 5000 el kilo, que es el precio que será puesto a las organizaciones no peruanas. Progresivamente, esa misma unidad va a ir aumentando de precio hasta llegar a su destino final con un valor de 50 mil euros, si es en Europa, y US\$ 60 000, si es en EE.UU. Incluso, según lo dicho en el párrafo anterior, estas cifras se calculan sin considerar el hecho de que recibido el kilo de clorhidrato pueden obtenerse de este hasta mil porciones de un gramo que pueden alcanzar un precio de US\$ 120 cada una. Entonces, estaríamos hablando de US\$ 120 mil, lo que empezó costando US\$ 700 en la chacra. Sabiendo esto, vale la pena preguntarse ¿quién se queda con la mayor parte de las ganancias del narcotráfico, el campesino, el traficante peruano o los grandes grupos criminales en el Norte?

Ese es el enorme dilema de una política de represión penal puesta en un escenario mercantil. No es un prurito de la teoría de la conspiración para acusar a Washington por sus intereses geopolíticos, sino un enorme problema que debe entenderse a partir de las complejidades existentes en torno a la oferta y demanda mundiales de la cocaína. Con el agravante de EE.UU. que afirma que su población está consumiendo cada vez menos y que ahora el problema es de los europeos, lo cual es cierto solo parcialmente, porque a pesar de la reducción efectiva de consumidores de cocaína

en ese país, EE.UU. sigue siendo aún el principal consumidor de cocaína en el mundo.

De esta manera, el escenario que proyectamos dentro de cinco años es uno en el que el problema de los diversos narcotráficos va a ser fundamentalmente un problema Sur-Sur. Entre ellos, ya tenemos el eje de la pasta básica que saliendo del VRAEM, el valle de Pichis Palcazu y el Trapecio amazónico, cruza los departamentos del oriente boliviano y llega a las grandes ciudades de Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires y Montevideo. Todos los indicadores existentes lo confirman: la expansión geográfica de lo que se conoce como VRAEM, la expansión de Sendero Luminoso hacia el sur andino amazónico, del narcotráfico, de la minería ilegal hacia las selvas de Cusco, Urubamba, Vilcabamba, Puno, Sandia, Inambari y Carabaya, así como la creciente cantidad de detenidos peruanos en Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz y Brasil, nos conducen a pensar en los nuevos escenarios del narcotráfico a partir de un complejo corredor geográfico Sur-Sur, que tiende a confirmarse.

Además, de aquí a cinco años el problema y las diferencias geopolíticas entre Brasil y EE.UU. van a ser tan severos que el país norteamericano acusará a los brasileños de no tener control territorial sobre la Amazonía y de estar promoviendo el narcotráfico. Los hechos ocurridos recientemente a partir de las revelaciones de Edward Snowden, respecto al espionaje norteamericano a la presidenta brasileña, es solo una primera muestra de estas tensiones geopolíticas. El problema es que Brasil, frente a la «narcotización» del territorio amazónico, ha militarizando las áreas de fronteras e involucrado a sus Fuerzas Armadas en operaciones policiales, lo que a nuestro juicio es un tremendo y grave error.

Por otro lado, es curioso que después de 30 años algo esté cambiando en la mirada internacional sobre el tema de las drogas. Juzgo esto a partir de dos hechos. Primero, la implosión de la política antidrogas en los EE.UU. (varios Estados admiten el consumo médico y recreacional del *cannabis*), y segundo,

la explosión y fractura de la política antidrogas norteamericana en el resto del mundo (por ejemplo, el reciente Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas presentado por la Organización de los Estados Americanos –OEA-⁴).

Lo que antes era solo una visión europea –la permisividad frente al uso de drogas vista en casos como Holanda, Zúrich, Fráncfort y Londres, impensable para los países de América Latina– ha cambiado. Vemos cambios sustantivos en nuestro continente cuando la Cámara de Diputados del Uruguay hace suya la propuesta del presidente José Mujica para regular el uso y la producción del *cannabis*, con fuertes posibilidades de que llegue a ser política oficial. Nuestro análisis nos indica que es una política muy bien pensada, con el objetivo de quitarle al narcotráfico brasileño o paraguayo el manejo del negocio a través del precio de este producto, reconociendo que todos los problemas de salud de drogas deben de ser vistos desde la salud pública y que todo lo relacionado con el verdadero tráfico ilícito tiene que ser un asunto policial.

En EE.UU., después de la «propuesta 19», en noviembre del 2010, la posibilidad de tener una industria de *cannabis* en el Estado de California perdió por un margen muy pequeño. Recientemente Colorado y Washington han aprobado el uso recreativo del *cannabis*, sumándose así a otros Estados que han aprobado el uso medicinal de la planta, lo que significa que dentro de EE.UU. se producen cambios sustantivos en materia de salud y prevención, aunque su política exterior mantiene las grandes estructuras de la Guerra contra las drogas.

Por otro lado, en la VI Cumbre de las Américas, llevada a cabo en Cartagena de Indias (en abril del 2012), los presidentes Juan Manuel Santos de Colombia, Otto Pérez Molina de Guatemala

⁴ Soberón Garrido, Ricardo. «Los Intentos de Reforma de las Políticas sobre Drogas en América Latina». *Revista Urvio*, n.º 13. Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 2013, pp. 27-39.

y Felipe Calderón de México, le dijeron al presidente estadounidense Barack Obama que el tema de las drogas no estaba en la agenda y que debía ser incluido porque no era posible que de este lado se siga poniendo la sangre, mientras que ellos ponían el plomo. El presidente Obama fue arrinconado y tuvo que ceder. Cuando el presidente Santos lee la declaración final de la VI Cumbre de las Américas, dijo que debía de haber una asamblea general de la OEA y un informe hemisférico dedicado a las drogas, porque no se podía continuar haciendo lo mismo y porque ya se había probado que las estrategias utilizadas no funcionaban⁵.

2. Identificación de ejes temáticos y actores puntuales

Pasando al escenario peruano, consideramos que este está dominado por la ignorancia y los intereses políticos, económicos y sociales. Cuando surge la política antidrogas en el Perú en 1978, a finales del gobierno del presidente Morales Bermúdez, la embajada norteamericana de ese entonces le deja un regalo, en inglés, al Estado peruano: el Decreto Ley n° 22095. Esta es la ley que la Policía peruana sigue aplicando 30 años después de promulgada. La ley se basa en la reducción de la oferta, la erradicación, la reducción de los cultivos, la presencia de la Empresa Nacional de la Coca (ENACO) y una presencia masiva del Ministerio del Interior a través del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (CORAH). Para mayor detalle, el encargado de esos proyectos de erradicación de cultivos fue Juan Zárate Gambini, entonces coronel de la Policía. 30 años después sigue en manos

⁵ En mayo último salió a la luz el Informe hemisférico del problema de las drogas en las Américas, en donde básicamente plantea cuatro escenarios posibles de aquí al 2025. La Organización de los Estados Americanos (OEA) –en el 2014– y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –en el 2016– harán una revisión profunda de las políticas antidrogas.

de ese mismo señor, actualmente civil, porque es el funcionario puesto por el Departamento de Estado norteamericano.

Por otro lado, el Departamento de Estado norteamericano aconsejó que en la estructura institucional del Estado peruano hubiese una entidad que ejerza la rectoría de las políticas de drogas, creándose así el Comité Especial de Lucha contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS), lo que luego sería DEVIDA. Esta instancia se formó en el año 1996 y permitió en ese entonces una interlocución ya no con el Ministerio del Interior, sino a través de CONTRADROGAS⁶.

De lo expuesto podemos constatar que la política antidrogas peruana siempre ha sido dependiente de los dictados y los presupuestos del Departamento de Estado norteamericano. Recién desde el 2009 empieza a decrecer masivamente la cooperación financiera del Departamento de Estado y del Pentágono, por lo que recién desde esa fecha podemos ejecutar acciones con recursos propios y pensar qué hacemos nosotros como peruanos. Sin embargo, esta situación sobreviene en un pésimo momento, porque ahora, en el 2013, somos los primeros productores mundiales de hoja de coca y vamos a seguir siéndolo por un buen tiempo.

Lamentablemente, si uno analiza en perspectiva la situación, es curioso constatar que de los últimos cinco presidentes peruanos, el que mejor o mayor posicionamiento ha tenido con el tema frente a su par norteamericano ha sido el expresidente Alberto Fujimori. Cuando se analiza la trayectoria de los expresidentes Alejandro Toledo y Alan García, en sus dos períodos, y ahora Ollanta Humala, vamos a encontrarnos con intereses formados o con ignorancia para abordar este problema. La ignorancia es no entender las lógicas globales y las domésticas que están detrás del problema del tráfico

⁶ Soberón Garrido, Ricardo. «El Narcotráfico en el Perú y la ausencia de una Política de Estado». En: **desco** - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, ed. *Perú Hoy. Un año sin rumbo*. Lima: **desco**, 2007.

de drogas, es perpetuar el mito de que la amenaza de cárcel y la sanción son suficientes para cortar el vínculo económico entre la oferta y la demanda del cultivo de hoja de coca.

Más aún, los intereses creados se ilustran en lo dicho por la exembajadora norteamericana, Rose Likins, en una reunión en la que estaba presente un anterior presidente de la Presidencia del Consejo de Ministros, refiriéndose a lo frustrada que se iba del Perú por el nivel de involucramiento del señor Alan García con el narcotráfico, viendo que era necesario vetar a esta persona como potencial candidato presidencial porque él había debilitado las estructuras del Estado peruano, y de paso por haber levantado varios negocios alrededor del manejo de esta problemática. De hecho, cuando asumimos nuestras funciones en DEVIDA, lo primero que encontramos fue un mecanismo denominado *task force*, donde mediante un trabajo conjunto entre aduanas, Ministerio Público y DINANDRO, se tomó el control de aduanas. Como parte de ese engranaje, el general de la Policía Nacional, Miguel Hidalgo, entonces ministro del Interior, retiró a la Policía de los recintos de control aduanero. La embajada norteamericana estaba muy molesta por el retiro de la policía antinarcóticos. A nuestra llegada hicimos todo lo necesario para que la reintegraran. Este es un ejemplo de como García no solo había ganado con el dinero del narcotráfico, sino que había debilitado las estructuras mismas del Estado peruano.

En ese contexto, el delito de narcotráfico ha pasado de ser el cuarto al segundo en incidencia de delitos en el Perú⁷. Actualmente, de 65 mil presos existentes en las cárceles del país, 25 mil lo están por delitos de tráfico de drogas⁸.

⁷ Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDDH). *Drogas y Políticas Carcelarias en el Perú*. Boletín n.º 5. Lima: CIDDDH, 2012. Ver en: goo.gl/nXXvXD

⁸ Washington Office on Latin America (WOLA) y Transnational Institute (TNI). *Sistemas sobrecargados. Leyes de drogas y cárceles en América Latina*. Ámsterdam / Washington D.C.: WOLA y TNI, 2010. Ver en: goo.gl/gq6lTf

Como se recordará, durante nuestros primeros 30 días en DEVIDA fuimos agredidos constantemente por la prensa nacional, hecho que tenía una explicación: a los tres días de asumir nuestras funciones se suspendió la erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca (como ya hemos visto, la erradicación forzosa no ha sido un factor de cambio durante los últimos años de lucha antidrogas). Era la primera vez en la historia del Perú que un gobierno suspendía la erradicación de cultivos de hoja de coca y los diplomáticos norteamericanos no tardaron en manifestar su oposición a esta decisión. Ni EE.UU. a través de su Embajada en Lima, ni todos los que han apoyado una política de Reducción de la Oferta nefasta en resultados, estaban dispuestos a aceptar cambios sustantivos en esta materia. Incluso un 14 de septiembre se nos dijo, a través de un señor Kirkpatrick, minutos después de haber asistido a una quema de drogas en el fundo Barbadillo, que «la tormenta había pasado y que en adelante la única voz autorizada para hablar de parte del gobierno de EE.UU. era la embajadora». Esto explica la virulencia inicial de la prensa (*El Comercio*, *Correo*⁹, *Canal N*, Jaime Antezana y Fernando Rospigliosi)¹⁰ y luego su apaciguamiento, ante la confirmación presidencial de nuestra gestión.

La cooperación internacional

Parte importante en esta problemática son los roles que juega la cooperación internacional, particularmente la norteamericana y la europea, que presenta básicamente tres problemas:

1. La dependencia de criterios externos de lo que se debe entender como desarrollo rural en el pie del monte amazónico. Ni los políticos ni los funcionarios en Lima terminan de entender el rol

⁹ «Nuevo audio deja mal parado a Soberón». *Correo*, Lima, 12 de septiembre del 2012. Ver en: goo.gl/6BmjO1

¹⁰ Miranda, Óscar. «Soberón, el hombre que sobrevivió». *La República* (Revista Domingo), Lima, 11 de septiembre del 2011. Ver en: goo.gl/0nB2ra

que le compete a la economía campesina de la selva alta, en contraposición a la economía intensiva del monocultivo dirigido a la agroexportación. Este grueso error se repite en el Perú, Bolivia y Colombia, los tres principales productores de coca.

Todas las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio (TLC) del Perú y Colombia involucran el tema de drogas para favorecer y subrayar la importancia de los criterios del TLC con cuatro grandes monocultivos aptos para la selva alta: la palma aceitera para producir biocombustibles, el palmito, el café y el cacao¹¹, estos últimos dependientes de los precios y ciclos internacionales. No se toma en cuenta la principal vocación de la selva alta, que es la forestación, ni tampoco se toma en cuenta la demanda de los mercados internos. Conversando con la gente del VRAEM, ellos insistían en la importancia de Huancayo, Ayacucho y Cusco como mercados regionales domésticos, lo que plantea la necesidad de encontrar una fórmula política para priorizar los productos del VRAEM en estas tres ciudades intermedias. Si bien es clave entender esto para el desarrollo de la zona y plantear alternativas concretas al cultivo de la hoja de coca, el Estado peruano no lo comprende así. En ese sentido, cabe preguntarse entonces qué es primero, la erradicación forzosa o el desarrollo rural alternativo.

Cuando consultábamos esta interrogante con los norteamericanos, ellos decían: *There is not choice, until there is not choice* (no hay alternativa hasta que no haya alternativa), primero que corten con el cultivo de hoja de coca y luego entramos con el chorro de dólares. Así sucedió en la región San Martín, en donde se dio un proceso distinto al del VRAEM, porque topográficamente es una zona casi plana (lo que permite espacios de monocultivo intenso, aunque ya se han acabado casi toda el agua existente en la napa freática); porque en San Martín hay toda una trayectoria social organizativa que viene de la época de la Federación Agraria Selva

¹¹ De Rementería, Ibán. *La elección de las drogas: examen de las políticas de control*. Lima: Fundación Ebert, 1995.

Maestra (FASMA) allá por los años 80 y 90; porque hay un gobierno regional encabezado por el presidente regional César Villanueva (que luego fuera nombrado Premier) que se ha preocupado en fortalecer institucionalmente la región; porque hay buenos precios internacionales para el cacao; y por último, porque había suficientes recursos del presupuesto peruano y de la AID (en ese orden). Ese es el mal llamado «milagro» de la región San Martín.

Además de estos elementos, existe uno adicional: en los inicios del siglo XXI el narcotráfico en América del Sur y la región andina estaba cambiando de patrón. La productividad de la hoja de coca en el Alto y Medio Huallaga ya no era tan buena, por lo que se buscaron otras zonas, como la selva central y el VRAEM, y se logró detener el transporte aéreo de coca del Alto Huallaga hacia el exterior. Así, cuando el narcotráfico abandonó ese patrón de trabajo, se crearon las condiciones para el desarrollo rural.

Los europeos en ese sentido tienen más criterio y plantean la erradicación, de un lado, y el desarrollo rural, de otro. Nosotros creemos que si priorizamos el desarrollo rural iremos reduciendo cultivos, siendo ese el camino por el que deberíamos apostar, motivo por cual sostenemos –y lo haremos siempre– que la erradicación es un concepto que solo busca arrancar físicamente una planta, contabilizarla en las metas y llevarla al Congreso norteamericano para decir que cumplimos, sin considerar que esa misma mata ha crecido unas hectáreas más adelante. Por eso, mucho más integral y sostenible es el concepto de reducción, donde cambiaríamos la erradicación forzada por erradicación voluntaria, el abandono de cultivos por sustitución de cultivos, etc.

Al respecto, pensamos que en los últimos tiempos los gobiernos del Perú no han sabido negociar este tema bajo el criterio de la responsabilidad compartida. Por ejemplo, EE.UU. le dio a Colombia, para el desarrollo del «Plan Colombia», después de fracasado el proceso de paz del presidente Pastrana, US\$ 5 mil millones por todo concepto, para terminar con el narcotráfico, recuperar territorio,

fortalecer la fuerza pública y de paso atacar también a las FARC. En contraste, este año el Perú, y vamos en bajada, recibirá US\$ 88 millones de EE.UU., US\$ 42 en asistencia policial militar y US\$ 46 millones en ayuda económica y social.

2. El cocalero es el actor clave. El VRAEM es la región de todas las sangres, hay chancas, huancas, machiguengas, quechuas, mestizos y blancos. Si uno quiere integrar la costa con la sierra, pasa por el VRAEM; si uno quiere integrar lo andino con lo blanco, pasa por la hoja de coca; aunque las respuestas que le damos a ese dilema lamentablemente no han seguido esta forma sincrética. El 16 de octubre, mientras se desarrollaba un evento organizado por la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Comando Conjunto, denominado «VRAEM, camino a la Paz», nos enteramos del ataque de un helicóptero del Ejército al poblado de Nueva Esperanza que dejó un muerto y cuatro heridos. Hay que entender que el cocalero es un sujeto al que le faltó tierra y que tuvo que migrar a lo largo de toda la selva alta, mimetizándose con esta región. Conforme nos acercamos al sur la fuerza andina se impone y por eso en el VRAEM se habla mucho el quechua y las mujeres usan polleras (aparece la papa acompañando a la yuca). Si bien esta es una excelente forma de integración, al mismo tiempo el VRAEM, como unidad territorial, es un ejemplo de la confusión enorme que existe a nivel político desde el Estado central.

No hay visión estratégica sobre esta región. Si bien se habla de crear una zona económica especial, pensemos mejor en crear una región VRAEM, extrayéndola así de los ámbitos de Junín, Ayacucho y Cusco. Lamentablemente el gobierno actual ha optado por la peor alternativa, la que debilita continuamente a la autoridad civil y aumenta la importancia de la autoridad político-militar.

Cuando el presidente Ollanta Humala habla de sus «guardianes pretorianos» de la democracia, habla de que él confía en

los militares, demostrando que tiene una visión netamente militar sobre el asunto. Sin embargo, perviven aún al interior de las fuerzas militares y policiales grandes estructuras de corrupción que vienen desde la época de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Un ejemplo de ello es la denominada «bolsa negra»¹² que manejan algunas unidades en zonas complicadas.

Entonces, el gran desafío es hacer que el cocalero se considere ciudadano¹³, porque el problema es que no se le considera como tal, sino como un narco-campesino. En el VRAEM, por ejemplo, hay una vieja deuda con los comités de autodefensa por la guerra que le hicieron a Sendero Luminoso. Conocemos personalmente al comandante «Sombra», al comandante «Tigre» y al comandante «Sombra» o «Vizcacha», tres personas que en los 90 lucharon contra las columnas senderistas en las márgenes de los ríos Apurímac y Ene.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha escrito poco sobre esta parte de la guerra¹⁴. Ellos piensan que dieron la sangre, que fueron entrenados por los comandos de la Marina para derrotar militarmente a Sendero, y que así lo hicieron, para luego quedar en la calle porque el Estado no les ha dado ni seguro, habiendo un pendiente con ellos que aún no ha sido pagado. Por otro lado, debemos tomar en cuenta que esta experiencia de autodefensa generó una estructura social militarizada, reforzada por los altos niveles de machismo en el VRAEM (mayores a los que hemos visto en otras zonas del país).

¹² Recursos manejados por una estructura aleatoria a la estructura formal de cada cuartel.

¹³ Soberón, Ricardo. «La Presidencia del Consejo de Ministros y la Ordenanza Legal del Gobierno Regional del Cusco». En *Debate Agrario*, n° 39. Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), 2005, pp. 155-187.

¹⁴ Cabieses, Hugo; Cáceres, Baldomero; Rumrill, Róger; y Soberón, Ricardo. *Hablan los diablos. Amazonía, coca y narcotráfico en el Perú: escritos urgentes*. Lima: Editorial Abya Yala, 2005.

Los cocaleros del VRAEM son arrasadores en todo el sentido de la palabra. Fueron hechos para extraer y arrasar, no para mantener y perdurar. Eso no los convierte en menos ciudadanos, sino que debe entenderse esa lógica para intervenir y cambiar. En ese sentido, el proceso de fortalecimiento del movimiento cocalero hasta el año 2003 fue muy interesante, hasta que aparecieron Elsa Malpartida y Nancy Obregón, quienes llegan al parlamento y terminan «estrellándose como locomotoras descarriladas». Un tema adicional es el proceso progresivo de criminalización del cocalero, impulsado por algunos analistas que, como Rospigliosi o Antezana, acudieron a la embajada norteamericana en Lima para generar mecanismos de contención al crecimiento político de este sector.

En los últimos años se han realizado megaoperativos policiales –Eclipse, Conquistar, Dinamo, etc.– con un mismo patrón, el uso del Constellation (interceptación telefónica más compra de testimonios de presos en Lurigancho, distribución de recompensas y otros mecanismos). Ninguno de estos megaoperativos ha logrado cumplir con sus objetivos.

El operativo Eclipse –que es el más antiguo– llevó a la cárcel a 62 personas, de las cuales 45 ya están libres, mientras que Ibúrcio Morales, el exalcalde del Monzón, murió en la cárcel con cáncer de páncreas sin haberse resuelto su situación jurídica. En realidad los operativos están dirigidos a desarticular el movimiento social cocalero ante el gran temor de que la experiencia boliviana se repita en el Perú, más aún cuando en el VRAEM los cocaleros tienen una larga experiencia militar.

Lo curioso es que Carmen Masías, de DEVIDA, y Wilfredo Pedraza, en ese momento ministro del Interior, con el limeñísimo sabor que tienen, decidieron un buen día anunciar la erradicación de cultivos de hoja de coca en el VRAEM. Por algunos canales intentamos decirles que si ellos erradicaban en el VRAEM, los Quispe Palomino iban a subir como la espuma y rebasar el límite geográfico que hoy tiene Sendero Luminoso/Proseguir en esa zona,

ya que las erradicaciones les permitirían concentrar en un mismo mando las zonas de Aguaytía, Alto Huallaga y Puno. Esta decisión estaría revelando tensiones en el Estado pues todo parece indicar que la Policía quiere llevar a cabo las erradicaciones (alineándose con las presiones ejercidas por la embajada estadounidense), mientras que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no sería de la misma opinión.

3. En estas circunstancias nos enteramos del interés del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por construir un aeródromo militar a cinco minutos de Pichari. Es verdad que, logísticamente, las Fuerzas Armadas necesitan operar con una pista de aterrizaje que permita el descenso de un avión Hércules en el VRAEM (hoy solo pueden llegar a Mazamari). Lo interesante del caso es que nos encontramos con que había un Proyecto de Inversión Pública (PIP) para construir este aeródromo que era vendido entre la población del VRAEM como uno de naturaleza civil para llevar desarrollo alternativo (el titular del PIP era del Ministerio de Defensa). A través de la congresista Verónica Mendoza le pedimos las explicaciones respectivas al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, sobre esta situación. El ministro tuvo que admitir que el proyecto existía. Luego nos enteramos de la existencia de un subcontratista del Pentágono, Mobile Military Engineers, que tenía un pequeño proyecto para elaborar el plan de diseño de la pista en Pichari.

Lo grave es que recientemente se promulgo la ley n° 30025 que ordena la expropiación de un conjunto de bienes a nivel nacional para distintos fines, donde se incluye el aeródromo militar de Pichari. ¿Qué se está jugando en ese contexto? Creemos que algo grave. Los EE.UU. siempre han usado la guerra contra las drogas en términos funcionales para sentar presencia en los Andes. Si bien la guerra contra las drogas está llegando a su fin, el Perú, que tenía al demonio chavista personificado en Humala, ahora tiene al benévolo mandatario articulado a la Alianza del Pacífico, quien además mantiene la visión de una guerra contra las drogas flotando.

En este contexto, el Perú y los EE.UU. tienen que negociar un nuevo convenio militar de seguridad y defensa que reemplace el firmado en 1952. Al respecto, ya ha habido conversaciones en Washington y en Lima, en donde la mayor preocupación está en el nivel de atribuciones que se les daría a los militares norteamericanos, lo que puede ser grave en una zona como el VRAEM.

3. Problemática y situación de la región

La región

El VRAEM, según el Informe de Naciones Unidas de Monitoreo de los Cultivos de Coca (2012)¹⁵, tiene 19 700 hectáreas de hoja de coca que pueden producir la tercera parte de la cocaína peruana por su capacidad de tener más cosechas que el resto de regiones productoras cocaleras, aun cuando, actualmente, los suelos de esta región están muy debilitados por la intensidad del uso de agroquímicos.

El área promedio del predio es de 0.5 hectáreas y una porción relativamente pequeña de predios está entre una y dos hectáreas. En algunas zonas hay propietarios de más de tres hectáreas, quienes, puede inferirse, están más cercanos a la producción intensiva de droga. Como puede notarse, la estratificación social de los cocaleros del VRAEM se basa en la cantidad de área que tengas. Por esta razón, el VRAEM está dividido en tres grupos sociales: pequeños, medianos y grandes productores; estos últimos poco interesados en sus organizaciones y agendas gremiales.

El que tiene una hectárea o menos es un tipo absolutamente dependiente del circuito, saca sus cuatro cosechas anuales y las vende. Pero si tiene mayor capacidad da un siguiente paso y se articula a un procesador, quien lo conduce a la poza de maceración

¹⁵ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). *Perú. Monitoreo de Cultivos de Coca 2012*. Lima: UNODC, 2013. Ver en: goo.gl/vfksr9

para elaborar Pasta Básica de Cocaína (PBC), la que es vendida a comerciantes locales que luego se encargaran de sacarla de la región y del país. Es en este proceso en el que Sendero Luminoso encuentra su nicho para participar de las ganancias, siendo su objetivo sacar la PBC del VRAEM y llevarla a Yanatile, a Madre de Dios o hacia la costa, y a las respectivas fronteras con Chile, Ecuador o el Pacífico.

Los medianos y grandes productores de coca tienen, obviamente, mayor capacidad instalada. Consideramos que hacia ellos podría apuntar un programa de interdicción fina. No les interesa participar en las organizaciones sociales -CODEPA, DECAS (distintas nomenclaturas para los comités de autodefensa y rondas del lugar)- ni en la Federación de productores del Valle de los ríos Apurímac y Ene (FEPAVRAE), que es la principal federación de productores agropecuarios de la zona. Tampoco les interesan las acciones con el Estado, y si bien entre ellos hay presencia criminal colombiana, mexicana, brasileña y boliviana, esta es muy puntual. Recordemos que las estructuras criminales, por lo menos las del Perú, se caracterizan por la permanente segmentación. Para evitar el seguimiento de los organismos de inteligencia, no forman organización alguna. De esta manera hay quienes se encargan de los cultivos, otros de la cosecha, del acopio, secado, procesamiento, refinación, transporte, almacenamiento en Lima y exportación, siendo muy posible que ni se conozcan entre ellos.

El otro elemento en relación al mercado internacional es que los mexicanos o brasileños tienen perfil bajo en el Perú, siendo su rol el de asegurar que se coloque en el puerto la carga mensual pactada. De esa manera, ese diferencial de US\$ 700 por kilo de cocaína en el laboratorio y US\$ 2500 puesto en el puerto es distribuido entre peruanos bajo el principio de la libre competencia, en el que todos tienen derecho de participar, siendo uno de los logros de este capitalismo narco la participación democrática. El único momento en que puede desencadenarse la violencia es cuando no se cumple

con lo pactado. Eso puede ocurrir en Lima, en la selva o en cualquier lugar.

Así tenemos que la fuerza empresarial de los pobladores del VRAEM es muy fuerte, seguramente por su trayectoria de lucha al haber participado activamente en la guerra interna de los años 80 y 90. Esto se ve en Bolivia o Argentina, países en los que el impacto de la migración peruana provocada por el conflicto armado es muy importante. Allí el comercio de PBC, «crack» y «bazuco» está en manos de peruanos, hijos de ayacuchanos que han aprovechado diversas formas y modalidades para llevar la pasta en pequeñas o grandes cantidades. Normalmente el mercado del Sur demanda PBC y no clorhidrato, como Europa y América del Norte. La pasta peruana ingresa a territorio boliviano y si se va a El Alto es porque se va a convertir en clorhidrato; si sigue de largo por Beni, Pando, Tarija o Santa Cruz, es porque se queda en pasta para abastecer el mercado brasileño. Otra característica interesante de la actividad criminal peruana es que estas están mezcladas, articuladas y camufladas en actividades perfectamente lícitas. En ese sentido, el circuito de ida es para llevar droga, mientras que el de retorno tiene diversas posibilidades (detergentes, gas, insumos, etc.).

Narcoterrorismo

Lo dicho da pie para dar nuevamente un rodeo sobre el término «narcoterrorismo». En 1984, el embajador Thumbs, por entonces destacado en Colombia, acuñó la frase «narcoterrorismo» para tratar de simplificar el problema y poder adecuar las políticas públicas globales de EE.UU. y del Pentágono a soportes más amplios que meramente los de seguridad¹⁶.

¹⁶ Soberón, Ricardo. «Geopolítica regional del narcotráfico y las políticas antidrogas». En: *Aportes para una nueva política de drogas V y VI Conferencia nacional sobre políticas de drogas*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2010, pp. 277.

Al respecto, no deja de ser interesante conocer las relaciones sostenidas entre grupos irregulares como las FARC, Sendero Luminoso y grupos fundamentalistas musulmanes con el narcotráfico. También es importante entender las relaciones entabladas por los movimientos campesinos y los Estados con los narcotraficantes. Sobre esto último, tenemos el ejemplo del otrora presidente de Colombia, Ernesto Samper, quien en 1994 salió elegido presidente de Colombia con dinero del Cartel de Medellín (el famoso Proceso 8000). En el caso del gobierno de Alberto Fujimori, este tuvo durante una década a un narcotraficante, Vladimiro Montesinos, dirigiendo su servicio de inteligencia.

Lo cierto es que terminada la Guerra Fría no hubo motivos para suponer que los grupos políticos más radicales en todo el mundo (Hezbollah, talibanes, grupos kosovares, ETA, IRA, FARC, Sendero Luminoso) no busquen obtener recursos de las actividades ilícitas, sin que ello necesariamente los inhabilite de su accionar político. Sin embargo, hay una gran diferencia entre nuestro análisis y el que realiza el Comando Sur de Estados Unidos, para el que las vinculaciones con el narcotráfico los inhabilita como actores políticos, es decir, dejan de lado su pertenencia a lo político y se convierten en grupos criminales normales con los cuales no cabe ninguna discusión política, sino represión y cárcel.

Fueron los militares peruanos los primeros en entender que esa no era una manera adecuada de diagnosticar el problema, entre ellos el general Alberto Arciniega. Después del desastre de Uchiza en 1987, Sendero Luminoso (SL) controló el Alto Huallaga. Cuando llega el general Arciniega a hacerse cargo del comando militar de la zona, plantea la existencia de dos enemigos (SL y el narcotráfico) y la necesidad de elegir el objetivo de la acción militar del Estado, siendo su decisión enfrentar a Sendero Luminoso haciendo que el movimiento campesino se alineara con él. El problema es que el Departamento de Estado norteamericano no entendió esta lógica. Incluso el embajador Melvin Levitsky afirmó

que las Fuerzas Armadas peruanas eran corruptas, lo que si bien era parcialmente verdad, no hizo que dejaran de cumplir con su misión de derrotar militarmente a Sendero Luminoso.

Si bien la «doctrina» del narcoterrorismo ya había ingresado en la Policía Nacional, actualmente ha penetrado en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), la Escuela Naval y la Escuela de la Fuerza Aérea, por lo que hoy es parte del componente ideológico de las Fuerzas Armadas peruanas. A nuestro juicio, este es un terrible error de concepto, porque el narcotráfico es un complejo problema económico y social muy típico de una economía capitalista, donde intervienen la oferta, la demanda, condiciones ambientales, laborales y sociales de producción, condiciones económicas, sociales y culturales de consumo, determinación de precios, de libre acceso y que se mueve de acuerdo a la oferta y demanda.

El terrorismo, por el contrario, es un fenómeno político complejo que no se mueve bajo esos mismos estándares, que tiene como propósito fundamental el generar condiciones objetivas y subjetivas de temor en grandes capas poblacionales para así poder permitir un determinado objetivo de orden político. Así fue desde Bakunin hasta Abimael Guzmán. Para graficar la diferencia, el terrorismo y el narcotráfico son como el fútbol y el básquet: hay dos equipos, una pelota y jugadores, pero la estrategia en cada uno es completamente diferente. El haber sumado ambos de modo que una misma política pública fuera a enfrentarlos, no funciona. En Afganistán, por ejemplo, no ha funcionado. Allí la ocupación militar norteamericana concluyó que debían de llegar a un acuerdo con los señores de la guerra para intentar bajar los niveles de producción de amapola.

En Colombia, después de 50 años de conflicto armado, el haber juntado estos dos fenómenos va a conducir a un segundo proceso de paz fracasado, porque las FARC quieren evitar la extradición de cincuenta de sus miembros a los EE.UU., mientras que el presidente Santos quiere la reelección. Las verdaderas causas estructurales del conflicto armado no les importan.

En el Perú también fue así, encontrándonos ahora en una nubosidad total en la que ni el presidente Humala ni sus militares saben dónde están. Cabe recalcar que hay varias tensiones al respecto, el interés de los EE.UU. por convertir al Perú en su aliado estratégico, pero sin transferirle fondos; la necesidad de Humala de recuperar territorio y población para el Estado de derecho, pero sin que el Estado entienda la orientación; entre otras. La autoridad que va de Lima al VRAEM llega a la base policial o militar, se queda un día y regresa de inmediato en helicóptero. Si bien no conocen en detalle cómo es esta región, sus aldeas y sus comunidades, la dependencia del VRAEM de todos los programas sociales es mayúscula.

El primer problema estructural tiene que ver con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Cuando desde DEVIDA elaboramos nuestra estrategia antidrogas 2012 - 2016, para presentarla a todos los ministros en diciembre de 2012, el primero que no la entendió fue el viceministro de Economía. Pidió cambiar el formato del documento y que se cesara a uno de los asesores de DEVIDA porque «estaba comenzando a malograr los esquemas del MEF» al señalar que no podía levantarse una línea de base de lo que se desconocía. Sumado a esta incomprensión de los problemas está el hecho de que el Estado carece de las herramientas metodológicas y estadísticas mínimas para intentar levantar siquiera información básica.

El segundo problema es la estructura presupuestal (dividida en partidas y unidades ejecutoras), porque hay una inmensa brecha entre lo que es el presupuesto público y lo que los «presupuestólogos» del MEF plantean y lo que la población campesina espera de su Estado. Las unidades ejecutoras son alcaldías, gobiernos regionales y gobierno nacional, por sectores. Los alcaldes piensan en cemento, mientras que el campesino piensa en cómo llegar al mercado con buen precio, con dominio de su producto. DEVIDA le ofrece talleres, viveros, parcelas participativas y pasantías. En suma, hay un

problema estructural que distancia el diseño de la intervención del Estado y las expectativas de la población «beneficiaria»¹⁷.

Otro problema que no es exclusivo del VRAEM es que la burocracia estatal limeña nunca hace caso a las demandas de la población. No hurgan en el historial social de las zonas, los procesos de elaboración de agendas, proyectos, perfiles y planes. De esta manera, cada actor elabora un nuevo diseño y se pierden los primeros dos años de gobierno local o regional para replantear las propuestas.

El otro problema es la dependencia de los cuatro monocultivos (café, cacao, banano y palmito) en los planes de desarrollo alternativo. Recuerdo cuando César Villanueva, presidente regional de San Martín, hablaba de la parcela prototipo de selva alta: forestería en la parte alta, un poco de hoja de coca para la caja chica, distintos tipos de ajíes, frutales, los vegetales que se pudieran y forraje para animales menores. Ese es el tipo de parcela para selva alta.

Pero el Estado limeño no conoce las particularidades de la selva alta, por lo tanto no se representa en sus acciones ni en sus actividades. Mucho menos una autoridad como el coronel Rojas Merino, encargado del Plan VRAEM, quien cuando era militar hacía ranear a los alcaldes, tendrá un mínimo de conocimiento sobre el terreno y la población con la que debe interactuar. Ahora bien, entre los impactos de la roya en el café y de otras enfermedades en el cacao, estará la cocalización progresiva de la agricultura de la selva alta, es decir, tenemos todas las de perder.

Existe otro problema estructural y es que DEVIDA depende de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), junto con otras 17 dependencias, incluida la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), disputas territoriales, gobierno virtual, además de otros,

¹⁷ Soberón, Ricardo. «Políticas sobre drogas y narcotráfico en el Perú. Memoria de un intento de reforma». En: Santiago Pedraglio, ed. *Cuadernos Descentralistas n.º 29. Ollanta Humala. Balance de un gobierno «ni de izquierda ni de derecha»*. Lima: Grupo Propuesta Ciudadana, 2012. Ver en: goo.gl/zkDFL7

donde cada una tiene alrededor de cinco minutos para exponer la problemática de cada área. El ente rector de un problema tan complejo como el narcotráfico debe estar al lado del Presidente de la República, porque él es quien debe saber si sus ministros están cumpliendo con sus funciones (por ejemplo en el caso del ministro de Agricultura, para saber cómo va la ejecución de los programas de desarrollo agrario y los programas de soporte técnico en las regiones cocaleras), sin tener que esperar los 5 minutos de todos los lunes de Consejo.

VRAEM, minería ilegal y otras actividades

Es clave entrar en este análisis porque la tendencia progresiva es a la generación de este complejo corredor geopolítico entre el VRAEM, Cusco, Puno, Madre de Dios, Bolivia y Brasil. Este es un intenso circuito comercial donde se observa el continuo incremento de actividades relacionadas al tráfico de drogas en Puno, Sandia, Carabaya e Inambari. Cabe recalcar que ahora es más sencillo operar cerca de la frontera con Bolivia –no solo para los que trafican drogas, sino también para Sendero Luminoso– pues toda la atención del Estado está centrada en el VRAEM.

Más aun, comparando las dos estructuras, la del cocalero y la del minero informal o ilegal, veremos que tienen similares patrones pero distinto rigor de extractivismo, porque el cocalero tiene que esperar tres meses para recién disponer de desechos tóxicos, los que termina arrojando al río. El problema es que la amenaza de cárcel no tiene ningún impacto sobre estos dos sectores sociales porque cunde la cultura del «todo se arregla». Esto último es clave porque cuando «no se arregla» estarán las grandes marchas, como las del 2001 al 2003 de los cocaleros, y las de los mineros en la actualidad.

Puno será el epicentro de este escenario convulso, donde debemos prestar atención al discurso del minero informal metido en coca porque es espectacular: dicen que cuidan el medioambiente.

En mi opinión, los equipos que desde la PCM intentan abordar el tema lo que hacen es postergar el tratamiento del problema, tirándolo para adelante porque se han dado cuenta que no pueden salir de él. El problema es que ningún gobierno de la región es capaz de lidiar con la minería informal, ni tampoco con la grande. Así, el presidente ecuatoriano Rafael Correa acaba de iniciar la explotación del Yasuni porque la comunidad internacional no le respondió respecto a los fondos pedidos para preservar dicha reserva. Evo Morales y Correa, en Cochabamba, acaban de decir que hay enemigos entre los ambientalistas. Ese es un problema serio que no estamos sabiendo abordar ni prevenir sus consecuencias. No tenemos la información necesaria y cada vez más se deja en manos de terceros las soluciones. De esta manera, la capacidad política de los representantes de la coca y la minería ilegal será mucho mayor en el futuro.

4. A manera de conclusión

En el VRAEM hay una enorme asimetría entre el margen izquierdo y el margen derecho de los ríos. Los distritos de la margen derecha –Cusco– están entre los más ricos del Perú (Pichari, Quimbiri, Echarate y La Convención), mientras que la pobreza del lado ayacuchano –Ayna, Llochegua y Sivia–, de la margen izquierda, es estructural.

El presidente regional de Ayacucho pretende enfrentar esta asimetría con la construcción de una red vial que enlace a las comunidades de ambas márgenes, como si eso fuera suficiente. En realidad la idea geopolítica para el VRAEM es tener un gran corredor vial que vaya desde Lima, Huancayo, Satipo, el Ene, Huamanga y Pisco, que circule fundamentalmente la producción de soya.

Aun así, lo vial es solo un aspecto y una parte de la solución. Debe también considerarse la pobre presencia del Estado

porque sus autoridades dejan muchísimo que desear. La gestión presupuestal es muy deficiente y los niveles de corrupción son absolutos, sin que la Contraloría pueda hacer algo para detenerla. El periodismo en la zona, salvo en contadas excepciones, está a la orden del día para hacer lo que la billetera disponga. Las únicas autoridades son la Policía y el Ejército acantonados en Pichari. Asimismo, subsiste un alto respeto por los comités de autodefensa, los que aún siguen siendo una estructura superviviente del conflicto y a los que habría que potenciar como posibles guardianes del bosque en un futuro.

A nivel de partidos políticos nacionales, es lamentable el poco entendimiento que tienen sobre el VRAEM. Como podrá suponerse, no hay ningún partido político presente en el VRAEM, cubriéndose ese vacío con expresiones locales como *Hatun Tarpuy*, cuya figura más conocida es el exdirigente cocalero Nelson Palomino (que ahora candidatea al gobierno regional por el etnocacerismo), sobre quien se ciernen sospechas respecto de su capacidad para negociar cosas con distintos actores, incluida la embajada americana.

Por otro lado, existe un tejido social gremial venido a menos. Hay cooperativas de cacaoteros y de cultivadores de ajonjolí, quienes, en ambos casos, son pequeñas estructuras que asocian entre 200 y 300 miembros con enormes dificultades para sobrevivir y participar del mercado. En estas organizaciones hay líderes muy interesantes aunque no pueden salir adelante porque están ocupados en sus problemas cotidianos.

Esa es, a rasgos generales, la situación de la región. No veremos cambios sustantivos al menos hasta el 2016 porque el presidente Humala no tiene una visión distinta a la de sus antecesores. En todo caso, hay que esperar que se detenga el proceso de militarización que está ocurriendo, porque pese a que se le ha hecho un daño severo en el plano militar a Sendero Luminoso, el narcotráfico sigue idéntico, no ha cambiado en lo más mínimo, por lo que no habrá cambios en ese sentido.

El presupuesto de la República para el 2014 sigue con el problema de ver al VRAEM como un territorio en el que hay que hacer una simple sumatoria de la programación de los sectores en la región (Salud, Transporte y Educación), sin plantear en absoluto un reflote de la economía alternativa, cuando lo que debiera estar en el debate es el desarrollo rural en selva alta y los resultados obtenidos por el enfoque de desarrollo alternativo implementado en los últimos 30 años proveniente del AID.

En otras palabras, evaluar los resultados de una intervención cuyo eje está en la dependencia de *commodities*, cuyos precios internacionales no controlamos y que no permitieron que el campesino tuviera dominio de su producción. Por otro lado, debemos considerar nuevamente la promoción de subsidios para la agricultura en zonas cocaleras, algo aceptado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, como un mecanismo legítimo que tienen los Estados para evitar que ingrese la cocaína en el mercado internacional. Finalmente, en las izquierdas latinoamericanas el tema de las drogas naturales ha sido muchas veces muy mal entendido, desde el proceso cubano, el chavismo más recalcitrante, hasta Evo Morales (quien identifica el *cannabis* como una droga, aunque no sea así, con la hoja de coca -la hoja sagrada-).